

Puerto Montt, veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve.

Vistos:

Con fecha 13 de octubre de 2018, en causa RIT T-130-2018, RUC 1840140496-8 del Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Montt, doña Pamela Lorena Mayorga Caro, interpone denuncia por vulneración de derechos fundamentales en procedimiento monitorio de tutela laboral en contra de su ex empleador el Gobierno Regional de Los Lagos.

Por sentencia de fecha 20 de febrero de 2019, la Jueza Titular doña Marcia Yurgens Raimann, rechazó sin costas, la denuncia de tutela laboral y demanda subsidiaria de despido carente de causal legal, nulidad del despido y cobro de prestaciones laborales interpuesta.

En contra de dicho fallo recurrió de nulidad el abogado de la denunciante don Miguel Angel Araya Aedo, fundando dicho arbitrio en la causal específica del artículo 478 letra b) y en subsidio la causal genérica del artículo 477, ambas del Código del Trabajo.

Solicita por último que se acoja el recurso y se proceda a anular la sentencia recurrida retrotrayendo la presente causa al estado de efectuarse una nueva audiencia de juicio para que un juez no inhabilitado conozca y se pronuncie respecto de la demanda principal y subsidiaria conforme a derecho, con costas del recurso.

En la vista de la causa que tuvo lugar el 12 de diciembre pasado, alegó por el recurso el abogado don Claudio Fernández y en contra la abogada doña Fabiola Yáñez, quedando la causa en estudio.

CON LO OIDO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente denuncia que en la sentencia concurre la causal de nulidad del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, que dispone, será procedente el recurso de nulidad, b) Cuando haya sido pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica.



Al respecto alega el actor que el fallo recurrido es incoherente, vulnerando los principios de la lógica y específicamente la regla del tercero excluido, entendido esta como la que dictamina que si una cosa puede ser explicada dentro de una de dos proposiciones contrapuestas, una debe ser falsa y la otra verdadera, pero no puede haber una tercera posible.

En este sentido, acusa que en el considerando décimo primero, al señalar que su parte no probó la existencia de un vínculo de subordinación debido a que las funciones eran prestadas no en la dependencias del Gobierno Regional sino de la Gobernación de la Provincia de Palena, en nada incide en la determinación de la existencia del vínculo contractual, que no constituye un indicio de éste tal supuesto fáctico, por el contrario, no es esperable que una relación regida por el derecho común se desarrolle en dependencias de un órgano público, con elementos e insumos proporcionados por el mismo y con vestimentas propias del mismo órgano.

Indica que la infracción a esta regla de la lógica es más evidente al señalar, en el mismo considerando, que el solicitar permisos administrativos o feriados no es parte de la subordinación alegada y que las solicitudes de salida a terreno sólo tenían el mérito de lograr el reembolso de gastos. En este punto dice la sentenciadora se aparta de la sana crítica y de la regla del tercero excluido, ya que es sabido que un contrato de prestación de servicios no puede estar sometido a requerir autorizaciones de ninguna naturaleza, puesto que el solicitarlo es prueba irrefutable de estar sujeto a las instrucciones de otro, en este caso de Coordinador del Programa Patagonia Verde. No es posible concebir un contrato a honorarios bajo el supuesto de que un profesional tenga derecho a vacaciones y días administrativos, ya que el uso y goce de ellos no depende de quién es el beneficiario, sino que debe ser objeto de un control por parte de quien tiene tal facultad, de otorgarlos o denegarlos.

Luego con las particularidades mencionadas se pregunta si puede existir un contrato a honorarios administrativos con esas



características, concluyendo que no, puesto que no puede existir una tercera clase de prestación de servicios de este tipo, bien puede ser una relación regulada por el Código del Trabajo, o bajo la lógica del Código Civil, pero no una tercera clase que atribuye a la mera creación de la sentenciadora del grado.

Además plantea que la sentenciadora del grado ha infringido las máximas de experiencia al no establecer hechos o considerarlos de manera contraria al principio de normalidad, puesto que no ponderó adecuadamente que una relación de 4 años ejerciendo funciones que son parte de los objetivos del Gobierno Regional, iniciados incluso con anterioridad a la vigencia del Plan Patagonia Verde,

Además respecto a las funciones que cumplía la denunciante y que la sentenciadora calificó como cometido específico, dice que desde el punto de vista de las máximas de la experiencia, se debe considerar que un cometido específico es aquel que está destinado a ejecutarse en un tiempo determinado, acotado, pero en este caso tiene previsto un umbral de 7 años, por lo que un trabajo de tal naturaleza no puede ser entregado a profesionales sin sujeción al control de la autoridad.

SEGUNDO: Que, sin perjuicio de que la doctrina ha estudiado el sistema de valoración de acuerdo a las reglas de la sana crítica muy pormenorizadamente, nuestro Tribunal Superior ha señalado que la sana crítica es “aquella que nos conduce al conocimiento de la verdad por los medios que aconseja la recta razón y el criterio racional puesto en juicio. De acuerdo con su acepción gramatical, puede decirse que es analizar sinceramente y sin malicia las opiniones de cualquier asunto. Las reglas que la constituyen no están establecidas en los códigos, se trata, por tanto, de un proceso interno y subjetivo del que analiza una opinión expuesta por otro, o sea, es una materia esencialmente de apreciación y, por lo mismo, de hecho, cuya estimación corresponde privativamente a los jueces del fondo”.

Ahora bien, como el recurso impetrado, es uno de derecho estricto, cuyo conocimiento impide una nueva valoración de los



hechos, es importante tener claro las limitaciones que el mismo impone, límites, respecto a los cuáles la Excma. Corte Suprema también nos ha ilustrado: “Verificar la adecuación del sistema de valoración probatoria a las reglas de la sana crítica no implica valorar nuevamente los hechos, pues tal labor excedería los márgenes del recurso y la competencia de este tribunal. En la especie, controlar la valoración de la prueba implica comprobar si el razonamiento jurídico del juez se ha adecuado a las reglas que impone el sistema de sana crítica; en otras palabras: examinar cómo han gravitado y que influencia han ejercido los medios de prueba en él a la hora de arribar a la decisión que ha consignado en la sentencia. Ello fuerza a revisar la manera o forma en que se han ponderado las pruebas, más no el material fáctico de la ponderación. No se revisan los hechos, sino la aplicación del derecho, en cuanto establece la forma de ponderar, labor que ha de hacerse sin valorar...”.

Que, teniendo presente lo anterior y respecto a la tarea que, de acuerdo a la ley, le corresponde a este tribunal, corresponde entonces revisar si en el proceso racional llevado cabo por el tribunal de base se respetó la lógica, las máximas de la experiencia; labor que se traduce en analizar de manera pormenorizada las argumentaciones que condujeron a la juzgadora del grado a dar por acreditados los hechos que debían ser probados y, sobre dicha base, decidir el asunto litigioso en uno u otro sentido.

TERCERO: Que con el fin de analizar la causal de nulidad alegada necesaria resulta dejar a la vista los hechos que estableció la sentenciadora del grado en su fallo:

SEPTIMO: “Ponderada la prueba de acuerdo a las normas de la sana crítica se han establecido los siguientes hechos:

1.- Que entre la actora y el Gobierno Regional se celebraron los siguientes contratos de servicios a honorarios: -El 11 de noviembre de 2014 con vigencia el mes de diciembre de 2014; -El 31 de diciembre de 2014 con vigencia enero –junio de 2015; -El 31 de diciembre de 2015 con vigencia enero a de marzo 2016; El 31 de marzo de 2016



con vigencia abril a junio de 2106; El 31 de junio de 2016 con vigencia julio a de diciembre 2016; El 30 de diciembre de 2016 con vigencia enero a de marzo 2017; El 31 de marzo de 2017 con vigencia abril a junio de 2017. En todos estos convenios la función encomendada era la de levantamiento de cartera de proyectos en el marco del Plan Patagonia Verde en la provincial de Chaitén.

- El 30 de junio de 2017 con vigencia de julio a septiembre de 2017; - El 29 de septiembre de 2017 con vigencia octubre a diciembre de 2017; - El 29 de diciembre de 2017 con vigencia mes de enero de 2018.

En estos tres últimos, además de la labor de levantamiento de proyectos, se agregó la de “apoyar profesionalmente en su calidad de arquitecta a otros servicios públicos con el objetivo de fortalecer el Plan de Reconstrucción de Chaitén. El lugar de prestación de los servicios de todos esto convenios fue la ciudad de Chaitén, en dependencias de la Gobernación Provincial.

- El 1 de Febrero de 2018 con vigencia entre febrero y diciembre de 2018.

En este convenio se contrata una nueva función consistente en “prestar asesoría destinada a la revisión y seguimiento en la presentación y elaboración de Planos Reguladores e instrumentos de planificación regional; Coordinar y hacer seguimiento del Convenio de Colaboración entre el Gobierno Regional, Subdere y Cámara Chilena de la Construcción y apoyar al Departamento de Ordenamiento Territorial en la coordinación y aplicación de herramientas de planificación regional”. El lugar de prestación de los servicios se traslada al Gobierno Regional en la ciudad de Puerto Montt.

2.- Que en todos estos convenios se establece que las tareas de la contratada serán controlados en su ejecución directamente por la División de Planificación; que tendrá derecho a reembolso de gastos de alojamiento y alimentación si debiera ausentarse del lugar habitual de desempeño: derecho a cursos de capacitación; que el honorario pactado se pagará previa emisión de informe de ejecución de la



asesoría evaluado por el jefe de división y presentación de boleta de honorarios; que el convenio a honorarios se suscribe en virtud de lo dispuesto en el artículo 11 del Estatuto Administrativo de modo que la relación se regula únicamente por las estipulaciones del convenio sin que resulten aplicables ni aun supletoriamente las normas del Estatuto Administrativo o Código del Trabajo. También en cada uno se establece que el plazo de contratación es “mientras sus servicios sean necesarios” sin perjuicio de fijar una fecha máxima de término.

3.- Que la demandada proporcionó a la demandante los elementos necesarios para la ejecución de su mandato consistentes en oficina, teléfono, correo electrónico.

4.- Que desde noviembre 2014 a enero 2018 la demandante se desempeñó en la ciudad de Chaitén.

5.- Que desde febrero a julio 2018, la actora se desempeñó en el Gobierno Regional, Puerto Montt.

6.- Que fue desvinculada con fecha 1 de agosto de 2018, a través de carta de notificación fechada el 10 de julio de 2018 por no ser necesarios sus servicios.

Todos estos hechos no han sido controvertidos y constan además en la prueba documental incorporada.

7.- Que el plan Patagonia Verde es un plan especial de desarrollo de la provincia de Palena y comuna de Cochamó destinado a promover de forma excepcional y extraordinaria, el desarrollo íntegro de dichos territorios, según definición contenida en el artículo 1 del DS 625 de Mayo 2015 del Ministerio del Interior y de Seguridad Pública.”

CUARTO: Que, al tenor de lo dicho anteriormente y respecto a lo que el recurrente ha calificado como infracción a la regla del tercero excluido, por cuanto solo siendo posible para explicar la naturaleza del contrato en cuestión, recurrir al Código del Trabajo o al Código Civil, la sentencia crea una tercera clase de contrato, lo que no es posible infringiendo la regla de la lógica señalada puesto que existiendo solo dos proposiciones posibles para explicar algo no puede haber una tercera posible.



Que respecto a las circunstancias por las cuales el recurrente funda el error lógico y que de acuerdo a su teoría del caso demuestran la dependencia y subordinación presente y propia del contrato de trabajo, se constata que al amparo de la autonomía de la voluntad y la libertad contractual que permite el estatuto administrativo, por remitirse en este caso a las normas del contrato y por ende al derecho civil, está siendo cada vez más frecuente que la Administración conceda contractualmente ciertos beneficios a las personas contratadas a honorarios, evitando una precarización mayor de las condiciones en que prestan servicios.

Estos beneficios, que pueden corresponder a cumplimiento de horario, distribución de jornada, derecho a permisos y vacaciones, por sí solos no pueden ser interpretados como demostrativos de un vínculo laboral, o “indicios de laboralidad” como le han llamado, puesto que la sola consideración de estos, desconectados de su contexto y de lo que dispone el marco normativo que autoriza este tipo de contrataciones, puede conducir a equívocos, ya que por ejemplo la exigencia de cumplir un determinado horario o la de supeditarse a ciertas directrices en la ejecución de las labores encomendadas, también son propias de una contratación de carácter civil, más aún cuando se debe velar por la correcta utilización de recursos públicos.

Concluimos entonces, que no fuerza la calificación de un vínculo contractual en uno de carácter laboral aquellos beneficios que las partes libremente han pactado, y de pactarse, esas cláusulas no hacen variar la naturaleza de un contrato, que seguirá siendo laboral o civil según sea el caso y no un tercer tipo de contrato de creación jurisprudencial, olvida en este punto el recurrente la clásica distinción del artículo 1444 del Código Civil entre las cosas que son de la esencia, de la naturaleza y accidentales de un contrato, donde evidentemente estamos frente a cláusulas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen a un contrato de prestación de servicios, pero que nada impide se agreguen por medio de cláusulas especiales, lo que no significa que el contrato degenere en otro.



De acuerdo a lo dicho, estos sentenciadores no vislumbran faltas a la lógica, en especial la regla del tercero excluido en el fallo recurrido.

QUINTO: Que, acusa también el recurrente infracción a las normas de la sana crítica al considerar la sentencia hechos de manera contraria al principio de normalidad, puesto que, desde el punto de vista de las máximas de la experiencia, se debe considerar que un cometido específico es aquel que está destinado a ejecutarse en un tiempo determinado, acotado, pero en este caso tiene previsto un umbral de 7 años, por lo que un trabajo de tal naturaleza no puede ser entregado a profesionales sin sujeción al control de la autoridad.

Cobra relevancia entonces, con el fin de resolver la controversia, analizar primero la normativa estatutaria que autoriza la contratación a honorarios y luego calificar si de acuerdo a los hechos acreditados, las funciones contratadas eran para un cometido específico o no.

SEXTO: El artículo 11 del Estatuto Administrativo, tantas veces citado dispone:

“Podrá contratarse sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la institución, mediante resolución de la autoridad correspondiente. Del mismo modo se podrá contratar, sobre la base de honorarios, a extranjeros que posean título correspondiente a la especialidad que se requiera.

Además, se podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación de servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales.

Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto.”

De acuerdo a dicho artículo la Administración podrá contratar sobre la base de honorarios en tres casos:



1.- A profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, en la medida que se requieran para realizar labores que cumplan con las características de accidentales y no habituales de la institución.

2.- A extranjeros que posean título correspondiente a la especialidad que se requiera, que debe hacerse del mismo modo anterior; y

3.- Cuando requiera la prestación de servicios para cometidos específicos.

La Jurisprudencia, tanto judicial como administrativa y doctrina, ha señalado que el artículo 11 citado establece la posibilidad de contratación a honorarios como un mecanismo de prestación de servicios a través del cual la administración puede contar con la asesoría de expertos en determinadas materias, cuando necesita llevar a cabo labores propias y que presentan el carácter de ocasional, específico, puntual y no habitual.

De este modo, corresponde a una modalidad de prestación de servicios particulares, que no confiere al que los desarrolla la calidad de funcionario público, y los derechos que le asiste son los que establece el respectivo contrato.

Ahora respecto al fundamento del contrato a honorarios, la Contraloría General de la República ha dicho que este se encuentra en la necesidad que tienen los jefes superiores de servicio de contar con la asesoría de especialistas en determinadas materias, respecto de asuntos relacionados con las funciones propias del respectivo servicio, sea cuando presenten carácter ocasional y no habitual –o en caso de ser permanentes o habituales, que se reduzcan a la realización de cometidos específicos que requiere atender el servicio. Dictamen N°16.220 de 1982.-

Entonces se podrán contratar a honorarios tanto para labores accidentales y no habituales como para labores habituales y permanentes de la institución, con la salvedad de que en este último caso la contratación deberá ser para un cometido específico.



SEPTIMO: Que precisadas las facultades que en materia de contratación a honorarios tiene la administración, en el caso en análisis importante resulta lo establecido en el considerando séptimo de la sentencia de recurrida, que sienta como hechos no discutidos por las partes los contratos suscritos, once en total, con sus fechas de inicio y término y las funciones que desempeñaba la denunciante a saber *–levantamiento de cartera de proyectos en el marco del Plan Patagonia Verde, en la comuna de Chaitén-* luego en otros contratos se suma a sus funciones la de *–apoyar profesionalmente en su calidad de arquitecta a otros servicios públicos con el objetivo de fortalecer el plan de reconstrucción de Chaitén-*, luego en el último contrato celebrado se acuerda la función de *-prestar asesoría destinada a la revisión y seguimiento en la presentación y elaboración de Planos Reguladores e instrumentos de planificación regional; Coordinar y hacer seguimiento del Convenio de Colaboración entre el Gobierno Regional , Subdere y Cámara Chilena de la Construcción y apoyar al Departamento de Ordenamiento Territorial en la coordinación y aplicación de herramientas de planificación regional-*.

OCTAVO: Que, siendo hechos probados los contratos suscritos con sus respectivas funciones, se debe clarificar si aquellas tenían el carácter de específicas como concluye la sentencia recurrida para hacer aplicable el artículo 11 del Estatuto Administrativo o bien funciones permanentes como señala el recurrente.

Para ello seguiremos al Diccionario de la Real Academia Española, que define específico como “Explicar, declarar con individualidad algo. Fijar o determinar de modo preciso.”

La Dirección del Trabajo también, a propósito de las funciones específicas del contrato de trabajo, y que dice que “por funciones específicas se entiende aquellas que son propias del trabajo para el cual fue contratado el dependiente y que las caracteriza y distingue de otras labores.” Dictamen 2702/066 de 10/07/2003.

Es en este orden de ideas y que con el mérito de lo dicho estos sentenciadores comparten la conclusión a la que llega la jueza del



grado en orden a establecer que los servicios prestados por el actor son coincidentes con el marco regulatorio de la contratación a honorarios, por cuanto como ha dicho la recurrente el Plan Patagonia Verde es específico y determinado en el tiempo, no resultando determinante para considerar su permanencia o función habitual del Gobierno Regional la duración de 7 años del programa.

Igual razonamiento referido a las funciones acordadas respecto al apoyo al Plan de reconstrucción de Chaitén, que evidentemente son específicas y no habituales del Gobierno y en el caso de la última función acordada aun cuando pueda considerarse que aquellas labores puedan ser habituales y permanentes de la labor del Gobierno Regional, el inciso segundo del artículo 11 de la ley 18.834, prevé la posibilidad que se trate de cometidos puntuales y específicos, respecto de los cuáles no opera el requisito de accidentabilidad y no habitualidad que exige el inciso primero de dicha disposición, por tanto es permitido el contrato a honorarios para labores habituales de la administración.

Es así entonces que las funciones encomendadas al actor resultan ser claras perfectamente diferenciables de las labores generales y permanentes del Órgano, que identifica el artículo 16 de la ley N° 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.

Por las razones dadas en los motivos precedentes no verificándose infracción manifiesta a las normas sobre apreciación de la prueba conforme a la sana crítica la causal principal será rechazada.

NOVENO: En subsidio de la causal anterior, el recurrente plantea que la sentencia ha sido dictada con infracción de ley que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

Que, respecto de la causal señalada, necesario resulta precisar, que, como se ha sostenido tiene como finalidad velar porque el derecho sea correctamente aplicado a los hechos o al caso concreto determinado en la sentencia. En otras palabras, su propósito esencial



está en fijar el significado, alcance y sentido de las normas, en función de los hechos que se han tenido por probados.

Entonces, en su mérito, corresponde confrontar la sentencia con la ley llamada a regular el caso, lo que supone no apartarse de los hechos probados en juicio, pues lo que se ha de examinar-en casos como el de autos- es si tales hechos encuadran en el supuesto legal respectivo. Así, para determinar si el juzgamiento ha sido el adecuado, resulta menester que los hechos fijados en la sentencia sean también reconocidos en el recurso de nulidad.

DECIMO: Preciado lo anterior, el recurso en análisis afirma que la sentencia recurrida no ha aplicado al caso de autos lo dispuesto en los artículos 1, 7, 8 y 9 del Código del Trabajo y ha interpretado erróneamente el artículo 11 del Estatuto Administrativo y los artículos 2006 a 2012 del Código Civil.

Señala que la decisión de la sentenciadora de fondo está en contradicción con la jurisprudencia mayoritaria al respecto, desde que dejó de aplicar a los hechos establecidos los efectos de una relación de trabajo, habiendo concurrido todos los elementos que exige el Código del ramo para estar en presencia de una relación laboral, creando un contrato innominado con indicios de subordinación y dependencia.

Argumenta que los hechos que se tuvieron por establecidos en la sentencia son suficientes para estimar que entre las partes existió un contrato de trabajo, concurriendo la subordinación y dependencia.

Respecto al artículo 11 del Estatuto Administrativo señala que la sentenciadora estableció que los contratos a honorarios suscritos lo eran para cometidos específicos, obviando que se trataron de servicios habituales del gobierno regional.

Dice que dicho artículo no crea un contrato, solo indica en que casos la administración del Estado puede contratar bajo esa modalidad, caso en el cual estamos frente al contrato nominado de arrendamiento de servicios inmateriales, regido por el Código Civil artículos 2006 a 2012, pero no se trata que de acuerdo al artículo 11



se cree un contrato innominado, de carácter administrativo imponiéndole al prestador del servicio obligaciones propias del contrato de trabajo, como lo dice el fallo recurrido, por lo demás, dice que las tareas cumplidas en ningún caso eran específicas sino que permanentes de los gobiernos regionales.

DECIMO PRIMERO: Que, para el análisis de esta causal se debe tener presente como argumentación lo expuesto en los motivos tercero a octavo de la presente sentencia a los que se hace expresa referencia por la similitud de argumentaciones de la recurrente.

En primer lugar, respecto a la interpretación del artículo 11 del Estatuto Administrativo, compartimos lo expuesto por la sentenciadora de fondo, con los agregados de los motivos sexto a octavo que se dan por reproducidos, concluyendo que estamos ante un caso permitido por el artículo estatutario ya citado.

Al optar por la aplicación del artículo 11 citado se debe desestimar necesariamente lo reclamado respecto a no aplicar los artículos 1, 7, 8 y 9 del Código del Trabajo, por cuanto la relación en este caso se regulará por las normas del propio contrato y no por lo dispuesto en el Código laboral.

Por último respecto a la vulneración de los artículos 2006 a 2012 del Código Civil se reproduce aquí lo dicho en el considerando cuarto de este fallo, en el sentido de que no hay en la sentencia recurrida la elaboración de un nuevo contrato, de carácter civil pero con obligaciones propias del contrato de trabajo, lo que hay es un contrato civil con cláusulas accidentales que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, pero que las partes en virtud de su autonomía acordaron, sin que ello degenere en un nuevo contrato.

Así las cosas, resulta claro que la sentencia recurrida no adolece del vicio denunciado, puesto que no ha aplicado las normas del Código del Trabajo señaladas por el recurrente, por cuanto como se dijo no se está en presencia de una relación laboral y en opinión de estos sentenciadores la conclusión jurídica arribada en el fallo de la instancia es la correcta, considerando las labores acordadas y en



general las características de la relación contratada, razón por la cual será desestimada la causal subsidiaria y el recurso.

Que, por las razones apuntadas deben rechazarse las causales de nulidad denunciadas, en forma principal la del artículo 478 letra b) y la subsidiaria contemplada en el artículo 477 del Código del Trabajo.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en los artículos 456, 459, 477, 478, 481 y 482 del Código del Trabajo, se declara que se rechaza el recurso de nulidad interpuesto por el abogado Sr. Miguel Ángel Araya Aedo en contra de la sentencia definitiva de fecha veinte de febrero de dos mil diecinueve dictada por la Jueza del Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Montt doña Marcia Yurgens Raimann, sentencia que en consecuencia no es nula, sin costas del recurso, por estimar que el recurrente tuvo motivo plausible para alzarse.

Regístrese y notifíquese.

Redacción del Ministro Sr. Jorge B. Pizarro Astudillo.

RoI 151-2019



Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Puerto Montt integrada por Ministro Presidente Jorge Pizarro A., Ministro Suplente Claudia Jimena Cárdenas N. y Abogado Integrante Mauricio Antonio Cardenas G. Puerto Montt, veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve.

En Puerto Montt, a veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

